

Calidad de vida

Vicente Pinilla Navarro y Luis Antonio Sáez Pérez

Profesores titulares de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Planteamientos iniciales

Calidad de vida y desarrollo son ideas que la mayoría de la población asocia y confunde, de manera acertada, pero que los expertos, los procedentes del mundo académico y los gestores de las políticas públicas, o al menos los que ejercían como referentes en cada ámbito hasta fecha reciente, se esforzaban en distinguir y mostrar en sus posibles contradicciones. Así, numerosas investigaciones económicas abordan los dilemas que surgen para cualquier comunidad entre crecer más frente a mejorar la equidad en la distribución de la renta y en la prestación de servicios básicos. También, bastantes políticos y burócratas, en la misma línea, han trazado planes de desarrollo acelerado que primaban la intensidad de los beneficios a corto plazo, independientemente de su sostenibilidad física, ambiental y social; "primero incrementar la producción, y posteriormente, cuando se haya acumulado suficiente renta, capital y tecnología, ya llegará el momento de repartir y de compensar a los colectivos y a los territorios que quedaron al margen de las ganancias", venía a ser el mensaje lanzado desde los despachos.

Cuando el análisis se plantea de forma tan acotada, conceptual y temporalmente, podría parecer que las disyuntivas son así de radicales, irresolubles en la práctica. Porque los recursos, siempre escasos y susceptibles de usos alternativos, deberían de ser prioritariamente dedicados y siempre a obtener unidades adicionales de todo aquello que posibilita ser más productivo, es decir, de aquello que se intercambia a través del mercado y contabiliza en la renta individual y nacional. Frente a esa actuación eficiente, todas las demás opciones supondrían un coste de oportunidad por dejar de invertir en la más provechosa en términos mercantiles. Entre ellas, todas las funciones de gasto favorecedoras de la equidad, de mejorar las condiciones de vida de los marginados, las reglas destinadas a facilitar la movilidad social, a mantener en buen estado el medio ambiente, serían despilfarros frente a la urgencia por alcanzar unos niveles de renta suficientes y ganar competitividad en los mercados externos.

Sin embargo, este tipo de aproximación resulta muy desenfocada para lograr primero una comprensión adecuada de las dinámicas del medio rural y consecuentemente poder plantear propuestas para su desarrollo pleno, porque prescinde de las interrelaciones del crecimiento económico con otros aspectos de lo social y de lo cultural, y porque no suele incorporar ni el medio ni el largo plazo, es decir, presenta una imagen incompleta y estática del bienestar y del progreso.

Propuestas de promoción del medio rural: desde el crecimiento hasta el desarrollo

Estos errores de partida se han cometido con relación al medio rural, en la forma de construir ciertas teorías explicativas de su declive y a la hora de diseñar estrategias para su regeneración. Así, al identificar nivel de renta per cápita y desarrollo, durante los sesenta y primeros setenta se creyó que el problema de las áreas rurales radicaba en su especialización agraria, y que trasvasando recursos

(población activa y capital) desde esas actividades al sector industrial, en el que la generación de valor añadido por unidad de input es muy superior, podrían redimirse los pequeños núcleos y detener la intensa salida de su población más cualificada, que la descapitalizaba en términos demográficos y productivos.

Pero aquellas políticas de promoción industrial fracasaron. En parte, porque los incentivos financieros y fiscales que las articulaban resultaban poco discriminantes, con elevados costes de transacción y sin los aspectos cualitativos e inmateriales de las áreas industriales tradicionales, donde se generaban espontáneamente una serie de externalidades derivadas de la aglomeración que no se podían reconstruir burocráticamente donde se carecía de un umbral de empresas y de población suficiente. Y en gran medida, porque la crisis de mitad de los setenta incidió en los parámetros fundamentales de este sector y modificó las ventajas relativas de todas las actividades. De manera que tras aquellos años, la investigación y la política sobre desarrollo rural se redirigió hacia los modelos de crecimiento endógeno.

Así, desde los ochenta se prestó gran importancia a las potencialidades locales. Todos los pueblos, por pequeños que fueran, detentaban algún activo subexplotado u oportunidades en nuevos negocios, dependiendo su puesta en valor, fundamentalmente, de que surgiera en su seno un emprendedor capaz de liderar un proyecto en el que se involucraran, además de los propios trabajadores, las instituciones y los grupos sociales. En lugar de las economías de escala, la flexibilidad en la organización interna y en la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado emergían como los determinantes principales de la competitividad.

Sin embargo, aunque la implantación de la industria en las pequeñas poblaciones iba lográndose poco a poco pero de manera decidida como consecuencia de ese apoyo a los núcleos basados en los recursos locales, así como por la deslocalización de las grandes empresas que buscaban salarios y suelo industrial más baratos que en las congestionadas ciudades, el medio rural seguía expulsando población durante los ochenta. En menor cuantía que en las dos décadas antes, pero la población más joven y más cualificada seguía partiendo hacia las ciudades.

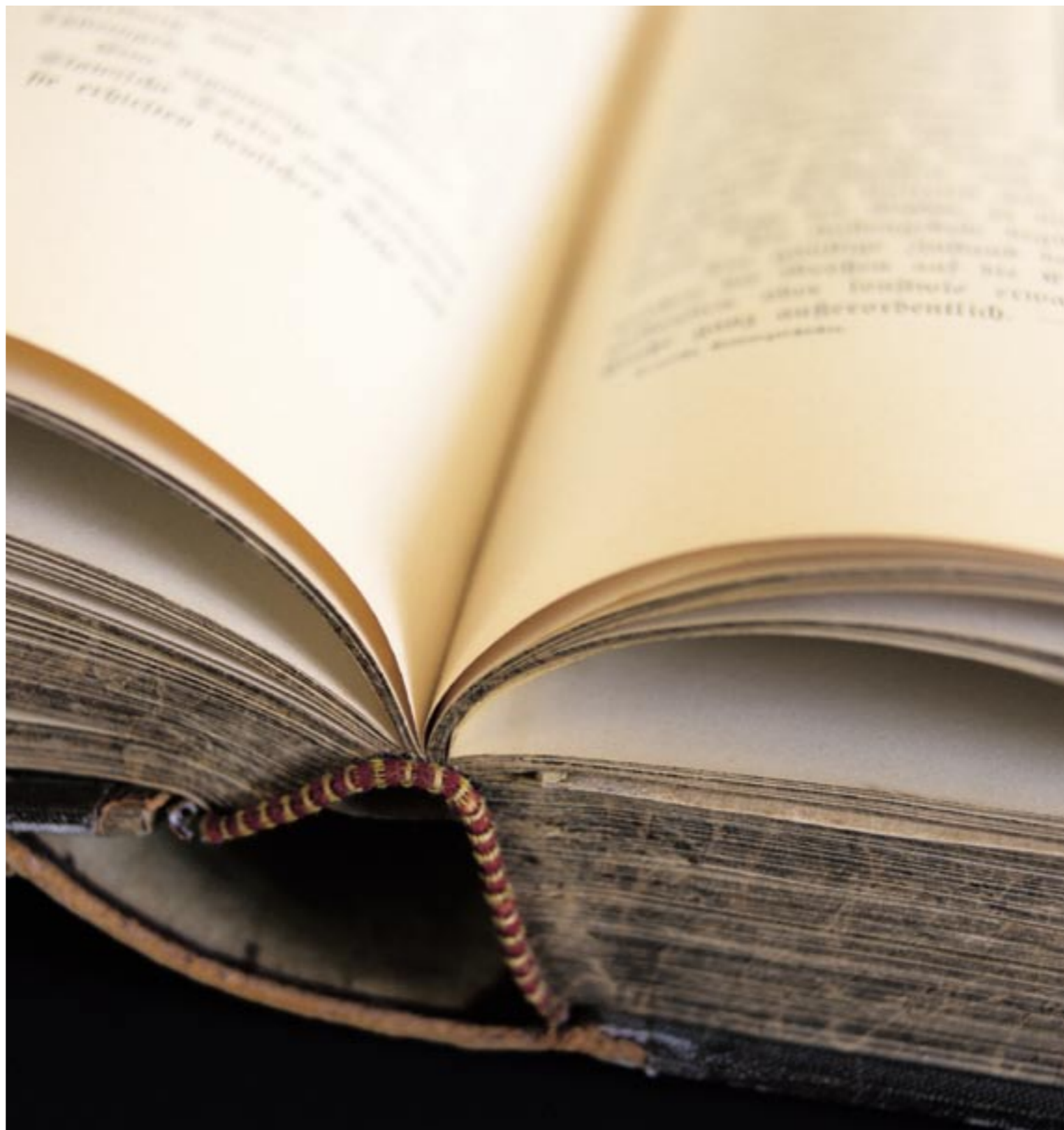
Aparentemente, ni los factores de expulsión ni de atracción de índole económica podían explicar la persistencia de las salidas: las tasas de desempleo eran mucho menores en el medio rural que en el urbano, el abanico de oficios y puestos que desplegaban las nuevas empresas resultaba, en principio, atractivo en términos profesionales, e incluso las explotaciones agrícolas y ganaderas adoptaban un enfoque empresarial y se integraban en redes de transformación y comercialización, de modo que su titularidad era una forma de dirigir un negocio con importantes grados de iniciativa y de creatividad. Provincias como Teruel, Soria, Palencia, Salamanca, Cuenca y Orense se situaban entre las que más crecieron en términos per cápita desde la segunda mitad de los ochenta, pero sus balances demográficos y territoriales seguían albergando muchos déficit. La

mayoría de los flujos entre lugar de residencia y de trabajo se trastocaban: los maestros, médicos, obreros de las fábricas, incluso algunos agricultores, vivían en una ciudad o una cabecera de comarca, e iban a trabajar a los pequeños pueblos donde radicaba su puesto. Lo económico, por sí sólo, parecía no poder explicar las decisiones de la gente.

A la hora de entender el intenso éxodo rural que durante esos años había tenido lugar se olvidaba como una de las variables claves -probablemente tan importante como las diferencias de ingresos entre el medio rural y el urbano o las nuevas oportunidades laborales en las ciudades- que los habitantes de las áreas rurales expulsoras de población tenían la percepción que sus posibilidades de mejora, y especialmente las de sus familias, estaban muy directamente asociadas al acceso a una serie de bienes públicos y servicios que identificaban como fundamentales. Los habitantes de las zonas rurales entendían, por lo tanto, que una buena educación para sus hijos, servicios de salud adecuados o determinadas posibilidades culturales eran tan cruciales para su nivel de vida como su nivel de ingresos. De esta forma puede entenderse mejor que el flujo migratorio se había nutrido no sólo de personas en busca de ingresos más altos o de ocupaciones en los sectores industriales y de servicios, sino también de quienes "votaron con los pies" ante la imposibilidad de lograr el acceso a lo que consideraban elementos sustanciales de la configuración de una buena calidad de vida. No sólo, como planteábamos inicialmente, faltó atención a esta dimensión para entender la diferencia entre crecimiento y desarrollo, sino que además, en un estado autoritario, la ausencia de voz dificultó que esa demanda obtuviera una respuesta adecuada desde la Administración.

Las dinámicas emergentes durante los noventa aclararon algo de las aparentes contradicciones de la situación previa, porque en esos años, en cambio, la regresión demográfica de numerosas zonas rurales se invierte, especialmente en términos migratorios. Desde el ámbito del mercado la justificación de su recuperación procede de una demanda creciente de experiencias rurales por parte de amplias capas de la ciudadanía, por lo que poco a poco se van revalorizando las propiedades en estos lugares y se multiplican la puesta en marcha de negocios que aprovechan sus activos naturales, culturales y paisajísticos. Desde el mundo urbano se plantea una nueva división de funciones del espacio en la que el papel del campo ya no es la producción agraria ni la descongestión metropolitana sino, primordialmente, ofrecer calidad de vida al conjunto de la población a través de una serie de experiencias vitales que tienen que ver con su especificidad arquitectónica, medioambiental, los valores predominantes en las relaciones sociales... Para una parte importante de los residentes en las ciudades, las pequeñas poblaciones detentan una mejor calidad de vida, al menos como para dedicarles su tiempo de ocio, que cada vez es más prolongado; incluso para algunos, la residencia en el medio rural se convierte en una prioridad, ajustando su vida al ejercicio profesional o empresarial que pueda llevarse en él.

Desde la esfera política el giro también es apreciable, pues en los últimos años se empieza a extender el estado del bienestar al medio rural: institutos, centros de salud, instalaciones deportivas, residencias, son construidos conforme los ayuntamientos democráticos asumen las demandas de sus ciudadanos y en la medida que las competencias gestionadas por los nuevos gobiernos autonómicos alcanzan contenido presupuestario. El acervo comunitario con sus políticas agrarias, de desarrollo rural y conservación medioambiental también inciden en la preeminencia de estos territorios en la agenda pública. En especial, el método de gestionar los programas Leader, con transparencia, integrando a instituciones políticas y gru-



pos sociales, y valorando las externalidades positivas en términos de género, territorio e innovación de los proyectos a apoyar, resulta fundamental en sí mismo y por los efectos ejemplificadores que genera. Así, aunque siga habiendo algunos problemas específicos, la brecha en el acceso a los servicios públicos entre la ciudad y los pequeños núcleos se ha cerrado considerablemente.

De forma que esa revalorización de la vida rural, como consecuencia del cambio de valores en la sociedad y que se ha reflejado en un cierto renacimiento empresarial y social en bastantes

poblaciones, y una mayor atención política, ha conseguido frenar la descapitalización humana que amenazaba su supervivencia. El que hayan sido los ingredientes relativos a la calidad de vida, en mayor grado que los concernientes a la cantidad de renta, los que han incidido en ese giro, induce a una serie de reflexiones sobre el desarrollo y el territorio.

Sin embargo, el presente y el futuro abundan en claroscuros. Las zonas que se benefician de la inversión de los flujos migratorios se caracterizan por elevados potenciales desde el punto de vista de

su patrimonio natural o medioambiental y también de una accesibilidad razonable desde los principales centros urbanos. En ocasiones, son simplemente zonas de descongestión de éstos, dando lugar al conocido fenómeno de la contraurbanización. En estos casos, la explotación de sus capacidades y ventajas puede ser plena y la percepción por sus habitantes y los nuevos pobladores de su elevada calidad de vida resulta muy evidente.

Sin embargo, otras zonas rurales con menos atractivos aparentes, o, simplemente, menos accesibles, quedan bastante al margen de este tipo de fenómenos y, consecuentemente, siguen experimentando intensos procesos de despoblación. Lamentablemente, el número de municipios que en lugares como Aragón ostentan esta condición supera todavía con creces a los que se benefician de las nuevas tendencias demográficas. Muchos aparecen atrapados en círculos viciosos de los que es difícil escapar. Su regresión demográfica dificulta la dotación de adecuados servicios públicos que hagan efectivos sus potenciales. La baja de densidad de población eleva los costes fijos en la provisión de dichos servicios y, por tanto, origina que las Administraciones públicas tiendan a concentrar éstos. Así, la vieja percepción de que la calidad de vida, entendida desde esta perspectiva integral, sigue siendo inferior en el medio rural que en el medio urbano refleja una realidad evidente.

Conclusiones

El desarrollo de una sociedad alude a las situaciones personales de quienes la integran, en las que además de quedar satisfechas unas condiciones materiales básicas se considera que es posible determinar en gran medida su propio destino, porque tienen autonomía propia, no son vulnerables social ni políticamente, y se desenvuelven en un entorno donde prima la confianza y la reciprocidad. Es decir, la idea de bienestar y de desarrollo se ha ensanchado desde lo cuantitativo a lo cualitativo, y desde lo individual a lo colectivo.

En el medio rural, respecto del urbano, se observan diferencias en los niveles de desarrollo en sus aspectos más convencionales, debido a la especialización sectorial, el tipo de empresa y la disponibilidad de ciertos recursos más cualificados, así como las economías de aglomeración que no puede generar. Pero también, a pesar de los muchos avances logrados, subsisten diferencias en sus elementos más cualitativos, como la accesibilidad a los servicios básicos del Estado del Bienestar. En cambio, en el disfrute de experiencias vitales derivadas de la disponibilidad de amenidades culturales, paisajísticas y medioambientales, así como de unas relaciones personales más directas y solidarias, el medio rural aventaja al urbano.

Abordar el desarrollo rural exige lograr que los intensos fenómenos de despoblación que viven todavía muchas comarcas aragonesas terminen. Para que el medio rural pueda ser competitivo y atractivo frente al urbano es precisa, si no una igualdad plena de acceso a los recursos básicos sí, al menos, que sus ciudadanos tomen sus decisiones en un contexto en el que la libertad de elección sea efectiva. Ello no es posible cuando las aspiraciones a una adecuada calidad de vida se ven frustradas por residir en zonas rurales.

En consecuencia, las Administraciones públicas, desde todos sus diversos niveles de gobierno, se enfrentan a un reto trascendental y urgente. No sólo porque lograr un cierto equilibrio territorial tiene efectos beneficiosos para el conjunto del país, sino porque los derechos fundamentales de las personas que habitan en el medio rural pueden verse gravemente amenazados.